

**EL IMPACTO Y LA EVOLUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO A  
LA LUZ DE LA LEY 1437 DE 2011 EN LA ACTUALIDAD**

**ERIKA NAYIBE SOLANO RODRIGUEZ – Código 043211073– Correo:**

**[erikan-solanor@unilibre.edu.co](mailto:erikan-solanor@unilibre.edu.co) – Celular 3159281783**

**SANDRA YANETH TOBASIA HURTADO – Código 043211106 – Correo:**

**[sandray-tobasiah@unilibre.edu.co](mailto:sandray-tobasiah@unilibre.edu.co) – Celular 3108104853**

**DOCENTE**

**DR. BELISARIO DAZA GONZALEZ**



**UNIVERSIDAD LIBRE**

**FACULTAD DE DERECHO**

**INSTITUTO DE POSGRADO DE DERECHO**

**ESPECIALIZACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO**

**BOGOTA D.C**

**2021**

**El impacto y la evolución del acto administrativo electrónico a la luz de la ley 1437 de 2011 en la actualidad.**

**The impact and evolution of the electronic administrative act in the light of law 1437 of 2011 currently.**

**Erika Nayibe Solano Rodriguez<sup>1</sup>**

*Universidad Libre*

[erikan-solanor@unilibre.edu.co](mailto:erikan-solanor@unilibre.edu.co)

**Sandra Yaneth Tobasía Hurtado<sup>2</sup>**

*Universidad Libre*

[sandray-tobasiah@unilibre.edu.co](mailto:sandray-tobasiah@unilibre.edu.co)

## **RESUMEN**

Estamos frente a la cuarta revolución tecnológica, por lo cual emplear las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) están actualmente inmersas en diferentes áreas, una de ellas el Derecho, las TIC inician su materialización en la jurisdicción Contencioso-administrativa a partir de la ley número 1437 del año 2011, de tal forma que se establecen los lineamientos para utilizar medios electrónicos en materia administrativa.

Una de las formas de materializar el uso de tecnologías en la jurisdicción Contencioso-administrativa ha sido el acto administrativo electrónico, este auge de uso de tecnologías puede generar vacíos normativos o confusión a la hora de aplicar la norma, por lo que este artículo

busca estudiar los elementos que dan validez y eficacia al acto administrativo electrónico, haciendo un estudio normativo, teórico y jurisprudencial.

**Palabras clave: Acto administrativo electrónico, Tecnología, jurisdicción contencioso-administrativa, validez, eficacia.**

## **ABSTRACT**

We are facing the fourth technological revolution, for which the use of Information and Communication Technologies (ICT) are currently immersed in different areas, one of them Law, ICTs begin to materialize in the Contentious-administrative jurisdiction from Law number 1437 of 2011, in such a way that the guidelines for using electronic media in administrative matters are established.

One of the ways of materializing the use of technologies in the Contentious-administrative jurisdiction has been the electronic administrative act, this boom in the use of technologies can generate regulatory gaps or confusion when applying the norm, so this article seeks to study the elements that give validity and effectiveness to the electronic administrative act, making a normative, theoretical and jurisprudential study.

**Keywords: Electronic administrative act, Technology, contentious administrative jurisdiction, validity, efficacy.**

## **INTRODUCCIÓN**

Desde años anteriores, en la historia se vino usando el papel como la única herramienta para plantear la voluntad de las personas en cada una de sus actuaciones, convirtiéndola en una costumbre; sin embargo, la tecnología ha venido facilitando el acceso a la justicia a los ciudadanos de modo virtual y digital.

En la Actualidad, se puede evidenciar que el internet facilita no solo en la comunicación entre las personas, sino que se ha convertido en avances administrativos, dándole validez jurídica a los trámites y servicios electrónicos.

Es importante tener en claro el concepto considerado de Acto Administrativo que surge con el Derecho Administrativo como un instrumento para diferenciar decisiones que se toman mediante vía de control siendo una manifestación unilateral de la administración que incide en el ámbito de los derechos individuales, colectivos y generales, dándole un reconocimiento al poder ejecutivo del Estado de un derecho propio, siendo el mecanismo a través del cual la administración identificaba la materia prima en la que se iba a ejercer el control.

El presente artículo de investigación pretende dar a conocer el acto administrativo electrónico a partir de la Ley 1437 del año 2011, teniendo en cuenta la base normativa, jurisprudencial y teórica desde su inicio y la forma en la que actualmente se materializa, en consecuencia se realizará un estudio que permita revisar el marco histórico de las TIC haciendo énfasis en el acto administrativo electrónico, seguidamente se estudiará la validez y eficacia del mismo, desde la conceptualización, elementos y finalidades, por último se revisarán las características mediante las cuales se ve materializado.

La presente investigación tendrá un estudio enfocado en la Ley 1437 de 2011, teniendo como base y objetivo de estudio la validez jurídica que ha tenido Acto Administrativo electrónico a nivel Nacional.

La investigación tiene un enfoque cualitativo ya que se abordará el concepto, historia, tipos y principios relacionados con al Acto Administrativo. De igual forma se busca determinar el avance de los medios tecnológicos del país.

Con el enfoque cualitativo se determina el origen y la evolución que ha tenido el Acto Administrativo en Colombia y como los avances tecnológicos han impactado de un papel a la propia virtualidad dando una regulación para la implementación y aplicación a nivel judicial.

Esta investigación es descriptiva al pretender indicar la evolución en materia de tecnología y todo lo que ello implica, teniendo como enfoque el acto administrativo.

El presente trabajo se realizará usando el método histórico – lógico, ya que se debe abordar los antecedentes del Acto Administrativo y el desarrollo en materia tecnológica.

Antes de la Ley 1437 del año 2011 – CPACA las notificaciones de las decisiones que se remitían mediante correo electrónico eran válido siempre y cuando existiera autorización con antelación.

Con la llegada de la Ley 1437 del 2011 comienza a evolucionar la figura electrónica, donde se daban actuaciones virtuales, no solo implementadas para los particulares, sino que a su vez es una herramienta usada por el propio Estado. Comenzando con la eficiencia y validez de la firma electrónica, siendo certificada por la entidad competente Certificadora de la Firma Digital, (Barrantes Venegas, 2008) entidades con facultades otorgadas desde el Decreto Ley 019 del 2012, siendo una actividad limitada pero que requiere de validez y legalidad.

Por tanto, el objeto del artículo es poder identificar ¿Cómo se materializa la eficiencia y veracidad del Acto Administrativo Electrónico en Colombia a la luz de la Ley 1437 del 2011?

Es por ello que se puede presumir que la eficiencia y veracidad del Acto Administrativo Electrónico se materializa mediante la aplicación y cumplimiento de los principios que dispone la Ley 1437 de 2011 y por ende “siempre y cuando se asegure su autenticidad, integridad y disponibilidad de acuerdo con la ley” (ley 1437, 2011 art. 57), es por eso por lo que su aplicación

tiene la base en el debido proceso y legalidad, teniendo en cuenta que las actuaciones administrativas deben realizarse bajo lo establecido por la constitución y la ley, por lo cual la emisión y recepción del acto administrativo electrónico debe estar sujeto a las leyes que lo regulan (Sánchez, 2017).

Por tanto, es importante llegar a analizar los requisitos que se deben cumplir cuando se expide un Acto Administrativo Electrónico sin estar en controversia con los principios constitucionales y jurisdiccionales, haciendo el debido uso de los servicios de la tecnología y la informática en la Administración Pública Colombiana.

En la actualidad se evidencia un vacío jurídico frente a la certificación y validez de la firma Digital; a pesar de estar regulada la misma por la Ley número 527 del 99, que originó la regulación de la Firma Digital comenzando con los establecimientos de comercio electrónico, no siendo lo suficientemente válido y eficaz para las entidades públicas (Barrantes Venegas, 2008), teniendo en cuenta que conlleva a generar gastos adicionales y generando traumatismos en las entidades.

Con lo expuesto anteriormente y bajo el marco de la validez legal y jurisprudencial del Acto Administrativo Electrónico se pueden llegar a presentar un sinnúmero de vacíos legales, al no estar regulado uniformemente el Acto Administrativo Electrónico.

En este sentido, diversas investigaciones en relación con el tema se han enfocado en las nuevas tecnologías dentro de la administración pública colombiana, generando problemáticas en el uso adecuado de los medios electrónicos, específicamente los documentos que llegan a ser vinculantes y son emitidos electrónicamente, generando dudas de veracidad de las mismas decisiones o traumatismos al momento de sus respectivas notificaciones y como se mencionó

anteriormente la veracidad y normatividad de la firma electrónica de los actos emitidos bajo el artículo 57 de la Ley número 1437 del año 2011.

Entre tanto, para poder llegar a resolver la problemática de la investigación se analiza una diversidad de sub-problemas, con el fin de afrontar la autenticidad al Acto administrativo Electrónico y su adecuada notificación por parte de la administración pública. Por lo anterior, el presente artículo comenzará a desarrollar cada uno de los pasos que se requieren para poder ejecutar, exponer y finalmente poder implantar una solución a la problemática y con ello poder jerarquizar cada uno de los elementos.

### ***Concepto y elementos del Acto Administrativo***

Identificar el concepto y los elementos que materializan el Acto Administrativo Electrónico, permite delimitar el objeto de estudio y por ende centrar el presente trabajo en cuanto a los criterios y consideraciones básicas que se deben tener presentes para el desarrollo del mismo.

En primer lugar, encontramos que el acto administrativo es:

“la manifestación de la voluntad de la administración, tendiente a producir efectos jurídicos ya sea creando, modificando o extinguiendo derechos para los administrados o en contra de estos, tiene como presupuestos esenciales su sujeción al orden jurídico y el respeto por las garantías y derechos de los administrados” (Corte Constitucional, Sala plena, C1436, 2000)

En consecuencia, para que el acto administrativo pueda originarse en el ámbito jurídico necesita de características y elementos intrínsecos, estos son: “la competencia de la autoridad

administrativa, la voluntad en la expedición, el contenido, la motivación, la finalidad y la forma” (Zambrano Cetina, 2015, p. 14)

La competencia hace referencia a la facultad que otorga la ley a un sujeto activo, en este caso quien emite el acto administrativo, para que pueda manifestar la voluntad; en cuanto a la voluntad y motivación se encuentra que está íntimamente relacionada con el objeto, ya que el segundo incide en el primero, siendo así lo que permite su materialización, toda vez que se encuentra ligado con el primer elemento, la competencia, y por ende establece el campo de acción de quién emite el acto (Sánchez, 2017), la finalidad esta determinada por el interés general, por ende el acto debe estar acorde a las normas y principios, por último, la forma se refiere a las formalidades existentes y determinadas por la ley (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Fallo 5373, 2000)

El Acto Administrativo cuenta con una estructuración en el ordenamiento jurídico con el fin de originar efectos decisorios, conforme la necesidad, la oportunidad y la conveniencia que requiere una administración, no siendo un simple instrumento mecánico de cumplimiento, sino que debe tener la contextualización correcta para la efectiva aplicabilidad, sin perder el enfoque de que dicho acto debe contar con un objeto, una causa, un motivo y la finalidad por la cual se emite el Acto Administrativo, teniendo a la producción de efectos jurídicos con intereses y derechos.

### ***El Acto Administrativo Electrónico***

Para llevar a cabo el enfoque de este trabajo se realizará un acápite referido al concepto y la evolución que ha tenido el Acto Administrativo Electrónico, y por ende la evolución de la tecnología en la administración pública teniendo en cuenta los requisitos y particularidades que permiten contextualizar de manera correcta el problema de investigación. Para profundizar los



objetivos propuestos, se contextualizará el problema socio jurídico que compone que es parte fundamental en esta investigación, por lo cual se hará la correspondiente división de temas que componen el trabajo, el primer acápite corresponderá al origen del Acto Administrativo en Colombia y su evolución teniendo en cuenta la pregunta de investigación. En este apartado, se expondrá la base normativa, jurisprudencial y teórica que sirvan como sustento y base para la realización del trabajo.

El capítulo IV de la ley 1437 dispone que:

“Los procedimientos y trámites administrativos podrán realizarse a través de medios electrónicos. Para garantizar la igualdad de acceso a la administración, la autoridad deberá asegurar mecanismos suficientes y adecuados de acceso gratuito a los medios electrónicos, o permitir el uso alternativo de otros procedimientos.” (Ley 1437, 2011, art. 53)

Teniendo en cuenta lo anterior el artículo 57 de la misma ley permite la emisión de “actos administrativos por medios electrónicos siempre y cuando se asegure su autenticidad, integridad y disponibilidad” (Ley 1437, 2011, art. 57)

Es por ello que las actuaciones que la administración realiza materializando el uso de las TIC “deberán interpretarse a la luz de sus principios: el debido proceso, la economía, la eficacia, la celeridad, la publicidad, la eficiencia, entre otros, que cobran especial relevancia frente a la utilización de medios electrónicos por parte de las Administraciones” (Sánchez, 2017, p.155)

Este acápite de la investigación permite conocer el estado actual del Acto Administrativo Electrónico y el avance tecnológico que este ha tenido, debido a que por la implementación de la tecnologías y más específicamente por las restricciones implementadas en la actual pandemia que nos ha separado físicamente, se hace necesario evitar el uso de medios físicos para la función

pública lo que conlleva a analizar varios aspectos como son: La veracidad, autenticidad, verificación de firma del Acto Administrativo y que este cumpla con lo indicado en la normatividad vigente y que por supuesto no vaya en contra de ningún principio constitucional.

El Acto Administrativo tiene su base normativa en la ley 1437 de 2011 y por ende este se tendrá que realizar a la luz de los principios allí consagrados, por ejemplo, el debido proceso o legalidad entre otros.

Teniendo en cuenta lo anterior se realizará el estudio de eficiencia y veracidad teniendo como fuente base desde el ámbito normativo la Constitución política de Colombia, La ley 1437 de 2011 y Decreto Ley 491 de 2020, y desde el ámbito doctrinal el libro de Marco Sánchez Acevedo titulado: “Eficacia y Validez del Acto Administrativo Electrónico – Una perspectiva en el derecho comparado de Colombia y España”, ya que en este el autor desarrolla de forma amplia y clara el concepto de eficacia y validez, y también se tendrá como base la tesis de Alejandro Ruiz Orozco “EL ACTO ADMINISTRATIVO ELECTRONICO EN COLOMBIA”, toda vez que aborda el tema de la firma digital enfocada en el derecho administrativo y de firma específica en los actos administrativos. se aclara que las referencias mencionadas hacen parte de las bases de la investigación, en consecuencia, no son las únicas y las demás referencias que soportarán este artículo se desarrollarán a lo largo del texto.

### ***Ámbito jurídico e histórico del acto administrativo electrónico***

La exposición normativa del acto administrativo electrónico se presentará de forma paralela entre su ámbito histórico y legal, teniendo en cuenta que estos dos aspectos se van desarrollando en conjunto en cuanto a su aplicación y estudio.

En diversos estudios de análisis de información se toma como primer antecedente como intentos de regular los medios electrónicos de datos en la legislación es el Decreto número 2150

del 95, en el que se buscó simplificar trámites que realizan en las diferentes entidades del Estado y también se comenzó a reglamentar el uso de tecnologías en el archivo y transmisión de datos. (Giraldo, 2003)

En cuanto al uso de medios electrónicos el Decreto número 2150 del 95 planteó lo siguiente:

“ARTÍCULO 26. Utilización de sistemas electrónicos de archivo y transmisión de datos. Las entidades de la administración pública deberán habilitar sistemas de transmisión electrónica de datos para que los usuarios envíen o reciban información requerida en sus actuaciones frente a la administración. En ningún caso las entidades públicas podrán limitar el uso de tecnologías para el archivo documental por parte de los particulares sin perjuicio de los estándares tecnológicos que las entidades públicas adopten para el cumplimiento de algunas de las obligaciones legales a cargo de los particulares”. (Decreto 2150, 1995, art. 26).

El primer elemento que se debe analizar dentro de este capítulo es la Ley número 527 del 99, ya que “define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales” (Ley 527, 1999) Así es como se inicia la regulación y da origen al uso de documentos. electrónicos

Desde este momento, se evidencia la obligatoriedad de la aplicación de la tecnología para la administración pública, sin tener un lineamiento que permitiera tener una validez de tipo probatorio, y así mismo dejando un interrogante frente a la interacción de los entes estatales, siendo un aporte débil a la incursión de la tecnología obligando así a los organismos del Estado a dar cumplimiento a la misma.

La Ley número 527 de 99, definió y reglamentó el uso de documentos y medios electrónicos, no siendo suficiente jurídicamente para la administración pública, debido a que no implementó las herramientas jurídicas puesto que solo obtuvieron un amparo legal dando un mínimo de veracidad y validez a la documentación electrónica.

A lo anterior, se ha venido emitiendo jurisprudencia y normas que buscan afianzar y hacer efectivo los principios constitucionales en la implementación del acto administrativo electrónico desde el año 1995 a la actualidad.

El Consejo de Estado ha venido aclarando el concepto de acto administrativo, haciendo referencia a una manifestación de voluntad de la administración y aclarando los “los requisitos de existencia del Acto Administrativo, conlleva entonces la aparición de elementos subjetivos como objetivos, de tal manera que para que nazca el acto como tal se necesita de un órgano que lo profiera, una declaración de ese sujeto, un objeto sobre el cual recae tal declaración, un motivo por el cual se realiza, la forma que ella tiene y la finalidad que persigue, lo cual, de observarse, resultarían ser comunes a todos los actos jurídicos estatales” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, S01017, 2019)

Es posible observar en el estado del arte de esta investigación, que el desarrollo del tema de uso de TIC en la administración pública está fundamentado en el desarrollo de implementación de normas y el reconocimiento de validez que se le ha venido dando al documento electrónico, comenzando con el Decreto 2150 de 1995, el cual da inicio a la implementación de nuevas tecnologías; teniendo en cuenta que tanto los documentos escritos o soportados en papel tienen la misma veracidad que un documento electrónico dando cumplimiento a la Ley 527 de 1999, la cual le otorga fuerza probatoria a las publicaciones electrónicas por parte de la administración pública.

A la fecha se han implementado diferentes elementos jurisprudenciales que sirven como base para reconocer la validez jurídica de los documentos que son emitidos de forma electrónica, como lo son el acceso a las TIC y la conectividad, la Ley 527 de 1999 fue implementada en el Colombia años después de las discusiones realizadas por la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional CNUDMI materializado con la Resolución 51/162 de 1996 la cual aprobó Ley Modelo sobre Comercio Electrónico siendo Colombia parte activa de cada una de las discusiones que hicieron parte de las decisiones de validez del Acto Administrativo Electrónico. (Flórez, 2014)

La Ley 527 de 1999 logra ser la principal herramienta que abarca los temas del desarrollo electrónico, a lo anterior se evidencia que esta ley permite darle un reconocimiento jurídico a los avances tecnológicos, concediendo efectos en los documentos que se emiten de modo digital y del cual busca reconocer dos principios esenciales de la Ley número 527 del 99: “a) El principio de neutralidad tecnológica y b) el principio de equivalencia funcional” (Ley 527, 1999)

Así mismo se evidencia que la jurisprudencia entra hacer parte de la fuerza de validez y veracidad de la tecnología y de cada uno de los avances que los mismos medios puedan traer para la facilidad del acceso a la información, dándoles seguridad jurídica y descartando cualquier tipo de vicio o nulidad, siempre y cuando se cumpla con los parámetros constitucionales y normativos. (Corte Constitucional, 2000)

Teniendo en cuenta el Estado de Emergencia que se vive a nivel Nacional, la administración pública ha venido implementando diversos programas y sistemas de tecnología con el fin de dar cumplimiento a la Ley 527 de 1999 brindando niveles de seguridad, confiabilidad y agilidad en los procedimientos internos y externos que las mismas manejan, principalmente dándole validez a los actos administrativos electrónicos.

Como norma base para la aplicación de la aplicación de las TIC en la jurisdicción Contencioso-administrativa se encuentra la ley número 1437 del año 2011, de forma tal que:

“el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo tiene un capítulo especial para las actuaciones de la administración pública en medios electrónicos (Capítulo IV Art. 53 y ss.), así como introduce la utilización de los mismos en los capítulos V y VI, además de algunos otros artículos especiales. Del mismo modo, en cuanto a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el trámite de los asuntos, la ley trae un sinnúmero de disposiciones en relación con la incorporación de nuevas tecnologías y medios electrónicos en sus actuaciones.” (Serna, Delgado & Gómez, 2014, p. 5)

La Ley 2080 del 2021 trae reformas al CPACA habilitando el uso de las TIC de manera adecuada y correcta entre las entidades públicas teniendo como objetivo intercambiar datos, por ende, información, reglamentando la obligatoriedad del uso de los medios electrónicos en los procedimientos administrativos, la Jurisdicción Contencioso administrativa y los trámites de servicios al ciudadano, todo bajo la vigilancia y control del Ministerio TIC

### **Concepción teórica de validez y eficacia analizada desde al acto administrativo electrónico**

El concepto que se ha venido trabajando a lo largo del derecho es inicialmente de contenido individual, personal o concreto siendo una manifestación unilateral, que por regla general la administración lo hace porque ejerce funciones públicas administrativas, pero que toda afirmación va a producir efectos jurídicos, identificando cinco elementos que son fundamentales para poder hablar de la existencia de un Acto Administrativo:

Se puede hablar como un primer elemento como una expresión o manifestación material ya sea concreta o específica, donde todo acto es una expresión de una autoridad mediante un

Acto Administrativo. En segundo lugar, se puede hablar de una expresión con carácter unilateral del poder de la Administración independientemente de que las partes hayan ejercido su derecho de defensa conforme los presupuestos del artículo 29 de la Constitución Política; teniendo en cuenta que la emisión del Acto Administrativo es producida por el ente o autoridad competente. En tercer lugar, la manifestación debe tener un carácter de voluntariedad conforme al ordenamiento jurídico identificando el vínculo entre lo expresado y los fundamentos de derecho que da lugar al Acto, luego la voluntad no es del agente público sino del ordenamiento respetando los principios y valores, siendo un producto de la objetividad que se aplique como servidor público. Como cuarto elemento, se tiene que la manifestación unilateral de voluntad se origine en un escenario de ejercicio de funciones públicas administrativas, porque es donde se identifica la veracidad del Acto Administrativo, con el fin de que se produzcan efectos en relación a derechos subjetivos o colectivos conforme el artículo segundo de la Ley 1437. Y como quinto elemento clave, para la identificación de un Acto Administrativo es que debe ser tendiente a la producción de efectos jurídicos para poder alterar el orden jurídico, con un carácter decisorio, que admite controversias a la misma.

En la actualidad la validez y eficacia de una actuación se ve ligada a los elementos o características que permiten que nazca a la vida jurídica, en cuanto al acto administrativo expone Pérez Ortiz (2013) que la validez del mismo se encuentra en los preceptos legales, es decir que se encuentre en lineamiento con el ordenamiento jurídico; La Corte constitucional también expone frente a la validez del acto administrativo que esta se da cuando se manifiesta una decisión por parte de la administración o quien corresponda, es decir que el acto es eficaz desde que se emite. (Corte Constitucional, C-069, 1995)

Con la expedición de la ley 1437 de 2011 se crea el artículo 57 el acto administrativo electrónico, donde los expertos encuentran que:

*“al estar soportado por medios electrónicos el acto gozaría de mayor durabilidad, confiabilidad, publicidad y comunicabilidad; sería multi-copiable según las necesidades y restricciones a mucho menores costos y quedaría -me atrevo a decirlo- blindado contra accesos no autorizados, pues con la incorporación de mecanismos como la firma digital se pueden otorgar atributos de seguridad jurídica tan importantes como la autenticidad, la integridad y el no repudio.” (Rincón Cárdenas, 2017)*

En cuanto a la materialización de los actos administrativos y por ende la validez del mismo se presenta que la Ley 1437 de 2011 genera como “requisitos” la autenticidad, disponibilidad e integridad, por lo que puede deducirse que si se dan estas características el acto administrativo electrónico es válido.

No se puede negar que el derecho administrativo ha venido trabajando en una transformación, buscando una rapidez y profundidad en los cambios, originando dos grandes expectativas desde la administración y desde la percepción del ciudadano con el fin acceder a mayor información, controlar las decisiones de los entes de control y mantener un enfoque en la evolución informática.

La autenticidad hace referencia a que el documento es lo que se afirma, por ejemplo, que quien lo firma es quien realmente emite el acto administrativo, en este aspecto la ley 527 del año 99 entra en materia por la firma digital, ya que “podría identificar con la misma a una persona como el autor; dar certeza de la participación exclusiva de esa persona en el acto de firmar y asociar a esa persona con el contenido del documento” (Sánchez, 2017, p.130) , en cuanto a la



disponibilidad se entiende que el documento pueda ser encontrado e interpretado, por último, la integridad indica que el documento no ha sido alterado y conserva su originalidad. (Ruiz Orozco, 2016)

Cabe resaltar, que para el año 2021 se expide por el Congreso de la República el Decreto 2080 en el mes de enero el cual genera reformas a la Ley número 1437 del año 2011 en relación a la implementación de los Actos Administrativos buscando la descongestión y agilidad de los tramites y contradicciones que se presentaron durante el Estado de Emergencia. La evolución que ha tenido el uso de las herramientas de las TIC contrae cambios de aplicación sustancial en la normatividad.

Desde el punto de vista tecnológico se ha venido implementando medios informáticos y telemáticos adecuándolo a la implementación del derecho a la realidad, donde el acto administrativo deja de ser un documento en papel y busca compactar con la tecnología cumpliendo con los requisitos que lo hagan valido, eficaz y veraz a la luz de la normatividad colombiana.

## **CONCLUSIONES**

Con la finalidad de solucionar la problemática de la investigación, se connota cada una de las regulaciones que se han venido implementando en relación al Acto Administrativo en Colombia, donde se hace necesario el uso de herramientas tecnológicas que ha generado cambios y avances en el Ordenamiento Jurídico Colombiano, con el fin de dar agilidad, eficiencia y eficacia de las decisiones otorgadas.

Cabe resaltar, que en la actualidad aún se tienen mucho desconocimiento en el uso adecuado de las herramientas, por tanto, la regulación de los documentos virtuales se ha venido presentando para la estructuración del Acto Administrativo Electrónico con el objetivo de hacer más fácil su interpretación y aplicación, en consecuencia, aún falta desarrollar la normativa en cuanto a los aspectos técnicos y jurídicos.

El acto administrativo se entiende completamente valido y nace a la vida jurídica desde que cumpla con los elementos de autenticidad, disponibilidad e integridad, por ende, su competencia y formalidad debe estar acorde a lo mencionado anteriormente, por ende, no se puede hacer una presunción de ilegitimidad por el hecho de no estar soportado en medio físico.

Con la Ley 2080 del 2021 expedido en el mes de enero genera reforma en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, se modifican aspectos relacionados con las TIC, indicando que el uso de estos medios digitales tendrá una regulación por parte del Gobierno y las TIC haciendo obligatorio el uso de los mismos como se presenta con el Modelo de Servicios Ciudadanos Digitales, donde toda Entidad Pública debe contar con una Sede Electrónica que venía siendo regulado por la Ley 1437 del 2011, donde algunas entidades ya cuentan con la Sede, pero que ahora será obligatorio con el fin de lograr un Estado más eficiente y ágil.

## BIBLIOGRAFÍA

Corte Constitucional. (2000). Sentencia C-662 de 2000. Obtenido de Corte Constitucional:

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-662-00.htm>

Flórez, G. D. (2014). La validez jurídica de los documentos electrónicos en Colombia a partir de

su evolución legislativa y jurisprudencial. *La validez jurídica de los documentos*

*electrónicos en Colombia a partir de sus evolución legislativa y jurisprudencial*, ISSN:

0121-3474(Verba Iuris 31), p. 43-71. Obtenido de La validez jurídica de los documentos

electrónicos en Colombia a partir de sus evolución legislativa y jurisprudencial:

file:///C:/Users/eriso/Downloads/54-Texto%20del%20art%C3%ADculo-104-1-10-

20170622.pdf

Función Pública. (2017). Concepto Sala de Consulta C.E. 00210 de 2017 Consejo de Estado -

Sala de Consulta y Servicio Civil. Obtenido de Departamento Administrativo de la

Función Pública:

[https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma\\_pdf.php?i=82338](https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=82338)

Serna, K., Delgado, S., & Gomez, J. (2014) APLICACIÓN DE MEDIOS TECNOLÓGICOS EN

EL NUEVO PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE

2011). (Trabajo de grado, Universidad Libre-seccional Pereira). Recuperado de

<https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/16790>

Giraldo, R. L. (Ed.). (12 de Mayo de 2003). Actos Administrativos por Medios Electrónicos.

Roberto Laguado Giraldo. Obtenido de Repository Universidad Militar:

file:///C:/Users/eriso/Downloads/14842-Texto%20del%20art%C3%ADculo-52530-1-10-20151120%20(3).pdf

Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (21 de agosto de 1999). Ley 527 de 1999 Nivel Nacional. *Diario Oficial*. Obtenido de RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.: <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4276>

El presidente de la República de Colombia. (5 de diciembre de 1995) Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. [Decreto 2150 de 1995]. DO: 42.137.

Ruiz Orozco, A. (2016). El acto administrativo electrónico en Colombia. (Tesis de maestría, Universidad Militar “nueva granada”) Recuperado de <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/14691/RUIZOROZCOALEJANDRO2016.PDF?sequence=1&isAllowed=y>

Barrantes Venegas, G. (2008). El acto administrativo por medios electrónicos en la legislación colombiana. (Tesis de maestría, Colegio mayor nuestra señora del rosario) Recuperado de <https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/30967>

El Congreso de Colombia. (18 de enero de 2011) Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo. [Ley 1437 de 2011]. DO: 47.956

Pérez Ortiz, R. (2013). *Eficacia y validez del acto administrativo*. (Trabajo de grado, Universidad Nacional de Colombia). Recuperado de <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/12215/700600.2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Rincón Cárdenas, E. (21 de diciembre de 2017). La total viabilidad Jurídica del acto administrativo electrónico. *Ámbito jurídico*. Recuperado de <https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-online/tic/la-total-viabilidad-juridica-del-acto-administrativo-electronico>

Corte Constitucional. (23 de febrero de 1995). Sentencia C- 069-95 [MP Hernando Herrera Vergara]

El congreso de la república de Colombia. (25 de enero de 2021) Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo -ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. [Ley 2080 de 2021] DO: 51.568

El congreso de la república de Colombia (18 de agosto de 1999) por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. [Ley 527 de 1999] DO: 43673

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. (31 de enero de 2019) Sentencia 01017. [MP César Palomino Cortés]

Sánchez, M. (2017). Eficacia y validez del acto administrativo electrónico. Una perspectiva en el derecho comparado de Colombia y España Editorial Universidad Católica de Colombia. <https://publicaciones.ucatolica.edu.co/gpd-eficacia-y-validez-del-acto-administrativo-electronico-una-perspectiva-en-el-derecho-comparado-de-colombia-y-espana.html>

Corte Constitucional, La sala plena de la corte constitucional. (25 de octubre del 2000). Sentencia C-1436. [MP Alfredo Beltrán Sierra]

Zambrano Cetina, F. (2015). *Elementos legales de validez jurídica de los actos administrativos emitidos a través de medios electrónicos de acuerdo con la ley 1437 de 2011*. (Artículo de reflexión, Universidad Santo Tomas. Recuperado de <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/572>

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso administrativo. (6 de abril del 2000) Fallo 5373. [MP Olga Inés Navarrete Barreto]



UNIVERSIDAD LIBRE  
INSTITUTO DE POSGRADOS  
BOGOTÁ D.C.

FORMATO APROBACIÓN  
METODOLOGICA  
PARA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

FECHA SOLICITUD

15

10

2021

Nº 17

DIA

MES

AÑO

ESTUDIANTE

E - MAIL

CELULAR

ERIKA NAYIBE SOLANO RODRIGUEZ [erikan-solanor@unilibre.edu.co](mailto:erikan-solanor@unilibre.edu.co) 3159281783

SANDRA YANETH TOBASIA HURTADO [sandray-tobasiah@unilibre.edu.co](mailto:sandray-tobasiah@unilibre.edu.co) 3108104853

TITULO DEL DOCUMENTO

EL IMPACTO Y LA EVOLUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO A LA LUZ DE LA LEY  
1437 DE 2011 EN LA ACTUALIDAD

FOLIOS

ANEXOS

PROGRAMA: DOCTORADO

☐

MAESTRÍA

☐

ESPECIALIZACIÓN

☒

ASESOR METODOLÓGICO

(Revisa la propuesta metodológica y técnica)

ASIGNADO A: \_

BELISARIO DAZA G

OBSERVACIONES:

APROBADO

☒

IMPROBADO

☐

Fecha del Concepto 15 Oct 2021

FIRMA: BELISARIO DAZA G

TUTOR DISCIPLINAR

(Revisa el contenido sustancial del trabajo)

ASIGNADO A:

OBSERVACIONES:

APROBADO

☐

IMPROBADO

☐

Fecha del Concepto \_

FIRMA: \_\_\_\_\_

